

7. Think tanks review: Limando ineficiencias

En muchos manuales de economía se habla de los fallos de mercado. Sin embargo, en la situación actual sería más oportuno hablar de los fallos que el sector público causa en los mercados. Como ha demostrado el Índice de Libertad Económica 2012 publicado por el think tank Heritage Foundation y The Wall Street Journal, los países más libres no son sólo los que más crecen, sino también los que mejor aguantan las recesiones (ver tabla).

Contrariamente al tópico, y aunque ayuda, no es estrictamente necesario que el peso del Estado en el PIB sea muy bajo para gozar de gran libertad económica, como demuestran los países escandinavos. Por ejemplo, esa libertad se puede lograr si en vez de que el Estado suministre directamente ciertos servicios, se da un cheque a los usuarios para contraten a los proveedores que crean convenientes, lo que haría que estos compitieran entre sí. Esto ya sucede en

Los quince países más libres, crecimiento del PIB en los últimos cinco años ● y tasa de paro ●, en porcentaje

		●	●
1	Hong Kong	3,9	4,4
2	Singapur	6,4	2,1
3	Australia	2,8	5,2
4	Nueva Zelanda	0,6	6,5
5	Suiza	1,9	4,5
6	Canadá	1,2	8
7	Chile	3,3	8,1
8	Islas Mauricio	4,6	7,5
9	Irlanda	-0,4	13,5
10	Estados Unidos	0,9	9,6
11	Dinamarca	0,1	7,2
12	Barhain	5,7	15
13	Luxemburgo	2,5	6
14	Reino Unido	0,3	7,9
15	Países Bajos	1,4	4,3

los sistemas escolares de muchos países y se va a implantar para la formación de los trabajadores en España.

Después del gasto público, nuestra peor nota en el Índice de Libertad Económica está en el funcionamiento del mercado de trabajo, donde apenas alcanzamos 51,8 puntos sobre 100. Los principales problemas que se presentan son la rigidez y la dualidad. La rigidez significa que hay muchas trabas para que los salarios se adapten a la productividad y las plantillas a las necesidades; la dualidad, que hay ciertos colectivos excesivamente protegidos y otros que no lo están tanto, por lo que hay menos movilidad laboral y muchos de quienes están fuera del mercado laboral podrían mejorar los resultados de quienes están trabajando.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada propuso hace unos meses el contrato único, un modelo de duración indefinida y de indemnización creciente en el que las primeras fases estarían más protegidas mientras que los trabajadores más veteranos, cuyos despidos están entre los más elevados del mundo desarrollado, jamás llegarían a los niveles de indemnización actuales. Ahora el grupo de análisis Politikon ha retomado la iniciativa añadiendo la “mochila austriaca”. Las ventajas son varias: se extiende la protección a todos los contratos y además la transición de un tipo de contrato a otro no deja a tantos empleados en el camino.

Por otra parte, la mochila austriaca haría al trabajador poseedor de una

La ‘mochila austriaca’ favorecería que la estancia de los trabajadores en el paro se acortara

cuenta de prestación por desempleo: “Si el empleado es despedido, podría rescatar su prestación de esa cuenta; si decide no hacerlo, o no la necesita, al final de su vida laboral esa cuenta se incorporaría a su pensión. Además, este sistema incentivaría la búsqueda rápida y activa de empleo cuando el trabajador perdiese el suyo”.

La mejora sustancial radica en que, con el modelo actual, muchos desempleados tienden a prolongar excesivamente el tiempo en el paro, por lo que acaban descuidando sus habilidades profesionales. Con la crisis, el problema se agrava, ya que los salarios medios se han reducido. Por eso, muchas veces el subsidio es mayor que el sueldo de un posible nuevo trabajo y se retrasa la incorporación para no renunciar a una parte de las ganancias.

Esto se ha intentado subsanar con la reforma laboral, subvencionando tanto a los trabajadores como a los empresarios. Sin embargo, a largo plazo la mochila austriaca presenta menos ineficiencias, además de que se evitan múltiples subsidios. Por ejemplo, disponer de un fondo de capitalización daría más facilidades para el emprendimiento

o el reciclaje, ya que el trabajador puede disponer de ese dinero como quiera, incluso aunque abandone voluntariamente su puesto de trabajo. Por otra parte, beneficiaría también a quienes encuentran un trabajo mejor remunerado.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la mochila austriaca y el ahorro voluntario que puede hacer un autónomo? La clave radica en que estos están acostumbrados a guardar provisiones, bien sea para su pensión o para reinvertir en su negocio, mientras que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena el nivel de ahorro siempre se queda por debajo de los niveles óptimos. Así, se minimizarían los riesgos de exclusión.

Y, sin embargo, ¿cuál es la garantía que tendrá el trabajador de que no será despedido para reemplazarlo por otro? Con una menor indemnización, es más fácil despedir a quien no aporta suficiente, pero hay costes vinculados a la entrada de nuevos trabajadores: el tiempo dedicado a la búsqueda, el que tardará el nuevo empleado en ser tan eficiente como el anterior y el riesgo de que no lo llegue a ser nunca.

El gasto en subsidios por desempleo ronda los 30.000 millones de euros en los últimos años, casi un 7% del presupuesto. Los incentivos perversos que una protección de ese calibre puede generar ya están comprobados, pero además, existen otras prestaciones (15.000 millones), ayudas a la vivienda (1.200 millones), servicios sociales (2.500 millones), formación (1.500 millones), cultura (500 millones)... que generan

nuevas ineficiencias y desincentivan el esfuerzo.

La solución puede pasar por limitar ese gasto, pero otra opción posible para evitar los efectos negativos es simplificarlo. El premio Nobel Milton Friedman proponía reducir todas las ayudas sociales a un tramo de impuesto negativo a la renta: que hasta un determinado nivel de ingresos, los ciudadanos cobrarán un cheque del Gobierno, que se iría reduciendo progresivamente según aumentara su sueldo.

De esta forma, se evitaría financiar una actividad que los ciudadanos no quieren y que los beneficios fiscales desincentiven el esfuerzo. Actualmente, las ayudas se retiran en cuanto se supera un determinado nivel de renta, de forma que los ciudadanos evitan traspasar ese umbral o, al menos, declarar que lo han superado. Como resultado, las ayudas se perpetúan en los mismos grupos y actúan como un lastre.

El impuesto negativo a la renta trata de actuar más bien como un soporte, una garantía de ingresos que va desapareciendo conforme deja de ser necesaria, con lo que se reduce el riesgo de fraude fiscal, que en España alcanza el 23,7% del PIB. Además, al ser un estabilizador automático, se evita el coste burocrático y se libera de trabajo a la Administración, eliminando la incertidumbre para que los ciudadanos puedan planificar mejor su vida.